

Resistir al extractivismo y construir una transición energética justa y popular en América Latina

Tatiana Roa Avendaño y Pablo Bertinat

Introducción

América Latina es una región rica en experiencias que han mantenido o recuperan la gestión de lo común y proponen otras formas de producción y de generación de la energía. Han sido décadas de debates y luchas contra todo tipo de proyectos que destruyen formas de vida, culturas, pueblos y ecosistemas. En ellas, las comunidades han incorporado cosmovisiones de los pueblos indígenas y originarios, que conciben el petróleo como la sangre de la tierra, los ríos como sagrados, el cuidado de los territorios, la gestión comunitaria y la producción agroecológica como central para la autonomía. Estos pueblos y comunidades nos muestran que la crisis climática y ambiental se puede enfrentar desde sus conocimientos y saberes, a través de otras maneras de relacionarnos con la Naturaleza, con la energía, con el agua y con el alimento. Todo ello implica repensar lo que hasta hoy hemos dado, por cierto, con el objetivo de propiciar

transformaciones culturales profundas y construir futuros donde el buen vivir o la vida sabrosa sean posibles.

Este capítulo busca presentar algunas propuestas que organizaciones y comunidades latinoamericanas han levantado y construido en torno a la energía y la transición energética. Inicia con un recuento de las luchas históricas contra los combustibles fósiles que han puesto el tema de la energía en la agenda de los movimientos. Re-coloca la comprensión de la energía misma, que frecuentemente es considerada un mero “sector” de la política que debe ser abordado desde el saber técnico, en el tejido de reproducción de la vida y las interrelaciones que la sostienen. Discute tanto formas alternativas de propiedad y gestión, como medidas requeridas por parte de los estados para viabilizarlas y llegar a un modelo energético justo, popular y sustentable. Finalmente, introduce la noción y las experiencias de energías comunitarias, que buscan recuperar el control y la gestión de la energía desde la organización social local.

Sendas transitadas para abandonar los combustibles fósiles

En la campaña presidencial de 2022 en Colombia, sorprendió el anuncio del entonces candidato Gustavo Petro, hoy presidente, de que su primer acto de gobierno sería suspender las nuevas exploraciones de hidrocarburos y prohibir el *fracking*, para avanzar en un desescalamiento del uso de los combustibles fósiles en el país. Si bien el planteamiento del presidente Petro asombró a muchas personas en Colombia y en el mundo, que consideraban imposible renunciar a la senda del petróleo, los debates y propuestas para dejar el crudo en el subsuelo y avanzar hacia sociedades pospetroleras tienen ya varias décadas de historia.

En junio de 1995, el pueblo u’wa, que habita en la frontera de Colombia y Venezuela, enfrentó la posibilidad de una explotación petrolera en su territorio. En respuesta, proclamaron un manifiesto público en el que afirmaban que preferían “una muerte digna” antes

que permitir la explotación de su tierra (Manifiesto Público del Pueblo u'wa, citado en Serje, 2003). Este manifiesto fue interpretado inicialmente como una amenaza de suicidio colectivo, pero en realidad fue una declaración de su determinación para luchar contra el bloque petrolero Samoré, que pertenecía a la petrolera estatal colombiana Ecopetrol y a la compañía estadounidense Occidental Petroleum Company (Oxy). El bloque petrolero ocupaba doscientas nueve mil hectáreas en el este de la Cordillera Oriental, en el departamento de Boyacá, y se traslapa con el territorio ancestral u'wa y algunos de sus resguardos.

La narrativa de la resistencia u'wa al petróleo se construyó a partir de su cosmovisión, que incluía una simple, pero contundente demanda: no querían la extracción de hidrocarburos en su territorio, ya que extraer petróleo de las entrañas de la tierra conllevaría la muerte de la Pacha Mama. Para este pueblo indígena, el petróleo significa “ruiría”, es decir, “la sangre de la Tierra”. Su intensa lucha, movilización y resistencia logró frenar la expansión petrolera sobre su territorio. En Colombia, esta lucha indígena amplió la perspectiva de las luchas sociales contra la explotación petrolera, incorporando elementos culturales como el valor sagrado, espiritual y simbólico del territorio para resistir al petróleo. Este puede considerarse uno de los primeros antecedentes de las resistencias para “dejar el crudo en el subsuelo” (Roa Avendaño, 2021).

En 1996, se creó en Ecuador la red sur-sur de Resistencias a las Actividades Petroleras, Oilwatch, impulsada por las organizaciones Acción Ecológica, de Ecuador, y Earth Rights Action [ERA], de Nigeria. Ambas compartían una posición radical contra la extracción y la industria petrolera. Sus críticas fundamentales se dirigían al papel que el petróleo ha desempeñado en el desarrollo capitalista moderno, los graves pasivos ambientales que ocasiona en los territorios y la crisis ambiental planetaria. Ese mismo año, durante la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático [COP] en Kyoto, Japón, Oilwatch presentó una declaración en la que llamaba a la moratoria de nuevos proyectos petroleros. La propuesta sonó radical y atractiva para

muchos grupos ambientalistas en el mundo, y cientos de organizaciones firmaron la declaración. La declaración de moratoria forzó a varias de estas agrupaciones a incorporar en el debate climático un asunto central: torcer el rumbo que trazaba el desafortunado ritmo de quema de petróleo en el mundo. De esta forma, las luchas contra el petróleo se fueron esparciendo como semillas (Roa Avendaño, 2021).

En 2007, mientras se discutía una nueva constitución política en Ecuador, organizaciones indígenas, campesinas y ambientalistas propusieron la iniciativa “dejar el crudo en el subsuelo” como solución concreta para enfrentar la crisis climática. La propuesta se basaba en que los países industrializados, responsables históricamente del cambio climático global, debían pagar a los países no industrializados con reservas petroleras (como Ecuador) para que estos dejaran el petróleo en el subsuelo, y con esos recursos, los países no industrializados se comprometerían con una transformación en su matriz productiva. El gobierno de Rafael Correa formalizó esta propuesta mediante la Iniciativa Yasuní, pero no tuvo suficiente apoyo de los gobiernos europeos ni de Norteamérica para asumir compromisos reales. Por otro lado, aunque los economistas ecológicos y ambientalistas ecuatorianos hicieron propuestas para conseguir el respaldo a esta iniciativa, el gobierno de Rafael Correa optó por continuar con la explotación petrolera en la Amazonía y no puso suficiente empeño en una diplomacia coherente con la iniciativa Yasuní.

Mientras tanto, Oilwatch presentó documentos cuestionando la sociedad dependiente del petróleo y explicando la urgencia de dejar el crudo en el subsuelo para construir modos de vida más sostenibles. En 2015, en la COP21 en París, Oilwatch propuso la creación de un Grupo “Anexo 0”¹ para reconocer y respetar los compromisos y

¹ La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, suscrita en la Cumbre de Río de 1992, dividió a los estados parte en dos grupos: Anexo I y No Anexo I. El Anexo I incluye países industrializados del Norte y algunos en transición, mientras que el No Anexo I abarca principalmente países del Sur global. Posteriormente se estableció el Anexo II que incluye miembros del Anexo I, para que proporcionen recursos financieros y técnicos a los países del Sur para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Según Oilwatch, el motor del desarrollo del capitalismo para

esfuerzos de las comunidades y organizaciones territoriales que están haciendo proyectos para no extraer petróleo, gas o carbón y así evitar el desastre climático (Oilwatch, 2015).

Tomando en cuenta estos antecedentes, el gobierno colombiano liderado por Gustavo Petro Urrego y Francia Márquez Mina, del Pacto Histórico, anunció en 2022 la suspensión de nuevas exploraciones de hidrocarburos y se comprometió a llevar a cabo una transición energética gradual, justa y ordenada. Durante la COP27, celebrada en noviembre de 2022 en Sharm El Sheikh, el presidente Petro presentó un decálogo de acciones para enfrentar la crisis climática, donde destacó la importancia de abandonar la senda de los combustibles fósiles. Petro (2022) declaró que “la crisis climática solo se puede superar si dejamos de consumir hidrocarburos. Es hora de desvalorizar la economía de los hidrocarburos con fechas definidas para su final y valorizar las ramas de la economía descarbonizada. La solución es un mundo sin petróleo y sin carbón” y exigió a “la banca privada y multilateral del mundo [...] dejar de financiar la economía de los hidrocarburos”. Los planteamientos de Gustavo Petro vuelven a situar el debate de “dejar el crudo en el subsuelo” en el ámbito gubernamental e incluso en la agenda internacional de negociaciones para abordar la crisis climática.

En este contexto, Censat Agua Viva, el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur y otras organizaciones elaboraron el documento “Disminución planeada de la dependencia fósil en Colombia: entre el cambio cultural y la gestión participativa de la demanda”. El texto presenta cinco propuestas que conducen, en “un proceso no menor a quince años, a una transformación socioecológica hacia otras formas de relación entre las sociedades y el conjunto de las especies y

los países del Anexo I y II ha sido la explotación de combustibles fósiles, y han hecho todo lo posible para detener cualquier medida que limite su consumo. A pesar de décadas de negociaciones internacionales, el calentamiento global sigue aumentando sin soluciones efectivas para detenerlo. La propuesta de Grupo Anexo 0 de Oilwatch daría voz en las negociaciones a los pueblos y comunidades que están resolviendo las causas de la crisis climática. (Véase: <https://www.oilwatch.org/es/2015/07/16/es-tiempo-de-crear-el-grupo-anexo-0/>).